

Los silencios y las voces

GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ

A punto de producirse mi cese como Alto Comisionado de apoyo a las Víctimas del Terrorismo estos meses de verano, me parece buen momento para transmitir experiencias, sentimientos y razones con ocasión de estos casi dos años en el cargo.

En mi primera apreciación debo reconocer mi error al aceptar y asumir las funciones cuando me lo propuso el señor presidente del Gobierno. Creí que era una obligación moral y que contaría con el apoyo de todos para cumplir lo mejor posible. Mis relaciones con todos los grupos parlamentarios eran positivas, sobre todo con el PP. En mi acceso a la Presidencia del Congreso de los Diputados tuve 339 votos, entre ellos la totalidad del PP de Manuel Fraga. Más tarde, a petición del Presidente Aznar, colaboré con el Centro de Estudios Constitucionales, dirigido entonces por la profesora Carmen Iglesias, en un equipo de profesores universitarios para estudiar la Constitución en relación con las posiciones de los nacionalistas vascos. El presidente debió de quedar satisfecho del encargo porque nos invitó a almorzar con él en Moncloa. Al tiempo, los sucesivos ministros de Educación, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, atendieron mis peticiones para abrir una línea de apoyo económico para construir Colegios Mayores. Esas ayudas colaboraron a disminuir el esfuerzo de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés —Colegio Mayor Fernando Abril Martorell— y en Colmenarejo —Colegio Mayor Antonio Machado—. También durante el Gobierno del PP el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, impulsó y completó el servicio de escolta que me acompañaba. Asimismo, me pidieron, de acuerdo el PSOE y el PP, que me incorporase al patronato de la Fundación Miguel Angel Blanco, donde fui bien recibido por todos. Podría seguir con más ejemplos de mi relación con la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Quizás eso y el carácter de apoyo humanitario y de ayuda a las víctimas del terrorismo me llevó al error enorme de pensar que estaba en un puesto concordia.

Sin embargo, nada más llegar me encontré con la hostilidad de los populares y de algún dirigente de asociación de víctimas próximo al PP. Me acusaron de dividir a las víctimas, de intentar marginarlas y acallarlas. También de favorecer tesis de ETA y otras barbaridades semejantes. A esas posturas se unieron personas con las yo había colaborado y que eran senadores, y otras a las que había ayudado a promocionar en sus carreras profesionales y eran diputados. Rajoy tardó en pronunciarse meses, pero cuando lo hizo fue especialmente ofensivo y me consideró uno de los tres más grandes errores socialistas, junto con la retirada de las tropas de Irak y la de las estatuas de Franco. En las manifestaciones que organizó la AVT fui increpado e insultado, coreándose entre otras frases de "Peces-Barba dimisión". Era obvio que no había hecho un buen diagnóstico. No sabía de lo que eran capaces algunos cuando se toca algo que creen de su exclusiva propiedad.

Con esa ofensiva agresiva y poco fundada empezó el trabajo y rápidamente hicimos un análisis de la situación y una evaluación de los problemas. Mi agradecimiento sin límites a todas las personas de la Oficina por su trabajo continuo y abnegado. Comprendí con preocupación que había muchos temas que resolver y muchas lagunas en la protección de los

afectados y de sus familias. Desde el primer momento tuvimos la comprensión y el afecto de víctimas de todo tipo y procedentes de todas las asociaciones, y muchas independientes y sin asociar, que son casi el 80% de la totalidad.

No puedo ni debo concretar los casos, pero lo cierto es que resolvimos muchos que nos produjeron gran alivio y satisfacción. Poco a poco los asesores de la Oficina, encabezada por el director general, el profesor Rodríguez Uribes, se fueron haciendo con los problemas hasta alcanzar un conocimiento exhaustivo de la situación. Eso nos ha permitido también preparar un anteproyecto de Ley Integral de Solidaridad, que ya está en manos del Gobierno y de la que nos sentimos orgullosos, trabajo realizado conjuntamente con cuatro profesores de la Carlos III, los profesores Fernández Liesa, Castro, Mercader y Colomer.

Mucha gente, muchos amigos, se interesaban preocupados por la situación y me preguntaban si la ofensiva contra mí me había preocupado y producido dolor. Siempre respondía que no, porque la imagen mediática no se correspondía con la realidad. El apoyo de muchas víctimas y de muchas asociaciones y la percepción de un trabajo honesto y callado me confortaba y aseguraba de su buen fin.

Las voces y los silencios estuvieron siempre presentes, y algunos silencios me dolieron y aumentaron mi pesimismo sobre aspectos de la condición humana, ni buena ni mala, pero desfalleciente, como diría Hariou. No me voy con resentimiento y sí con algunas convicciones reforzadas, como la experiencia de un apoyo constante de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y de ministros como Juan Fernando López Aguilar, Toño Alonso, José Bono, Alfredo Pérez Rubalcaba o Jesús Caldera, y de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y delegados del Gobierno, así como de la Oficina competente del Ministerio del Interior y de sus directivos. También confortado con tantas y tantas voces positivas de ciudadanas y ciudadanos y de todos los portavoces competentes menos los del PP.

Me entristecieron en las manifestaciones voces de personas que no me conocían y que actuaban con mimetismo de agresividad transferido. Pero sobre todo me entristeció la postura de dos o tres buenos amigos del PP, que lo son desde la Universidad, hace más de cuarenta años, cuyo silencio me ha resonado tanto como el vocerío más estruendoso. En ese punto mi pena es infinita, sólo contrarrestada por dos personas del PP que nunca se han unido al coro, sino que han expresado afecto y consideración. Me refiero a Manuel Fraga y a Gabriel Cisneros. Me han devuelto mi vieja idea de que adversarios no son enemigos y que la dialéctica carismithiana del odio no es defendible.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad Carlos III de Madrid.

El País, 31 de julio de 2006